

Primero: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Higinio Sanchez, por la pena que gubernativamente le impuso el C. Prefecto politico del Estado, multándolo en cien pesos, pues que tal providencia vulnera las garantías consignadas en el artículo 7º de la Constitución general de la República.

Notifiquese á las partes, publíquese en los periódicos, y previa reposición del sello 5º de que se ha hecho uso, con el 3º correspondiente, elévense estas diligencias á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. El C. Juez de Distrito de este Estado fallando definitivamente, así lo decretó y firmó con testigos de asistencia por falta de escribano actuario. Doy fe.—*M. G. Castro.*—*Francisco Carrillo.*—*Juan G. Arce.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 24 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Colima por el C. Higinio Sanchez, contra la providencia del C. Prefecto politico de la Capital del Estado, que con violación de las garantías consignadas en los artículos 6º y 7º de la Constitución federal, le ha impuesto una multa de cien pesos por haber publicado el numero 18 del periódico titulado "La Aurora" de que es administrador, sin el nombre y propietario de la oficina en que se imprime: visto el informe del C. Jefe politico; el parecer fiscal con cuanto más se tuvo presente y verconvino. Por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito en 6 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Higinio Sanchez por la multa de cien pesos que gubernativamente le impuso el C. Prefecto politico del Estado, con violación de las garantías consignadas en el ar-

tículo 7º de la Constitución general de la República.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca-

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Luza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañela y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*E. Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 9 de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Manuel Oliver, en representación de varios ciudadanos, contra el impuesto de doce y medio centavos que les cobra el Ayuntamiento de Minatitlán, por cada una de las toneladas que miden los buques conductores de maderas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Manuel Oliver, como apoderado de D. Nicolas Lopez, D. José Casauranne, D. Guillermo R. Dick, D. Ricardo H. Leetch, D. Federico Taynton, D. Isaac Maldonado y C^{ya} y Sres. Duplan y Maldonado, del Comercio de Minatitlán, pide amparo y protección para sus poderdantes, contra providencias dictadas por el H. Ayuntamiento de aquella Villa, con la aprobación del Ejecutivo del Estado, que invaden la esfera de la autoridad federal con infracción del artículo 112 de la Constitución general, que ordena: "tampoco

pueden los Estados sin consentimiento del Congreso de la Union, establecer derecho de tonelaje, ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones y exportaciones; siendo así que las enunciadas providencias imponen el derecho de exportaciones á las maderas de caoba y cedro que se vendan ó entreguen al comercio de Minatitlan para su exportación, á razón de doce y medio centavos por tonelada de las que midiere el buque que las conduzca, cuya atribución corresponde á la autoridad federal; y habiendo sido admitido el recurso tan solo respecto de los que no hubiesen pedido amparo en el otro juicio igual que cursaba ante los tribunales, se pidió el informe correspondiente al H. Ayuntamiento, quien lo emitió, acompañando todos los justificantes del caso que obran en su archivo, de los cuales deduce: que la autoridad del Estado, no ha invadido la esfera de la federal, por no haber decretado derecho alguno de exportación ó tonelaje, sino sobre las maderas que producen los terrenos nacionales ó de particulares, y son vendidas al comercio de Minatitlan, sirviendo de base para su cobro, con el objeto de impedir el fraude, el número de toneladas que midiera el buque que deba conducir las y para invertir en las atenciones del municipio.

Con vista de lo actuado, de las razones expuestas por el representante de los quejosos, y de las aclaraciones que hace el H. Ayuntamiento, considera el infrascrito, que el derecho impuesto por la autoridad del Estado, para atender á los gastos mas indispensables de la municipalidad, de que se trata en este juicio, no está comprendido en las prohibiciones establecidas en la fracción 1.^a del artículo 112 de la Constitución general, porque como está demostrado con los documentos acompañados al informe del H. Ayuntamiento, solo ha servido de base para la exacción del derecho municipal indicado sobre las maderas del caoba y cedro, las toneladas del buque en que debieran embarcarse; pero no se ha decretado para

que lo pague el buque ó su capitán, ni el sobrecargo, ni por razón de la exportación de las maderas, porque bajo esos conceptos solo á la autoridad nacional toca legislar.

Los poderdantes del C. Oliver, se excusán con el frívolo pretesto, de que para cobrar ese impuesto se establece la indicada base del tonelaje del buque, y que es injusto cobrarla según ella, porque no siempre se embarca el número de toneladas que mide cada buque; pero esto no es exacto; porque siendo la mayor parte de los que van al puerto de Coatzacoalcós destinados á cargar maderas preciosas, muy rara vez dejan de llenar sus bodegas y aun la cubierta de las embarcaciones, los que hacen el comercio de exportar maderas del país.

A los fundamentos asentados se agrega, el de que el Supremo Gobierno, por su resolución de 2 de Setiembre de 1873, fojas 13 y 14, ordenó á la Aduana marítima de Coatzacoalcós, que á los exportadores de madera no se les permita el embarque hasta que acrediten haber pagado el impuesto municipal respectivo; y siendo el mismo Supremo Gobierno, tan celoso de las atribuciones que le corresponden, muy lejos de haber reclamado con motivo de ese derecho, ha dictado sus disposiciones oportunas, para que tenga su cumplimiento, lo que acredita que no ha sufrido invasión alguna en sus facultades constitucionales, ni en las del Congreso nacional, á consecuencia del impuesto municipal que motiva este juicio.

Por estos fundamentos, el suscrito Promotor pide á V. que se sirva denegar el amparo solicitado, no imponiendo la multa á los promoventes, por no haber temeridad en la solicitud, según la inteligencia que se ha estado dando para su aplicación al artículo relativo de la ley orgánica de 1869.

H. Veracruz, 31 de Marzo de 1874.
Lic. J. M. Lopez de Escalera.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Veracruz, Julio 18 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por D. Manuel Oliver, en nombre y representación de los Sres. Ricardo Lecchi, Nicolas A. Lopez, José Casauraine, Guillermo R. Dick, Federico Tayuton, José María Maldonado, (como agente de la Sociedad Isaac Maldonado y C^{as}), y Constantino Maldonado, (en representación de la Sociedad Duplan y Maldonado) comerciantes de la Villa de Minatitlan, contra el impuesto de doce y medio centavos, que con el nombre de municipal, les cobra el Ayuntamiento de dicha Villa, por cada una de las toneladas que miden los buques que conducen las maderas preciosas que exportan. Visto el ocaso del representante de los quejosos, que fundó su petición, en que el cobro del impuesto referido, ataca los derechos de sus representantes, tanto porque viola en ello la garantía consignada en la Fracción 1^a del artículo 112 de la Constitución general de la República, que prohíbe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones, cuanto porque se opone al artículo 78 del arancel vigente, que declara libres de derechos á su importación, todos los productos, efectos y manufacturas nacionales. el informe justificado que como autoridad ejecutora del acto reclamado rindió el expresado Ayuntamiento, y lo pedido por el O. Promotor fiscal, de todo lo cual y especialmente de los comprobantes adjuntos al informe referido, aparece que el impuesto de diez centavos por tonelada que se cobraba á los buques que llegaban á cargar maderas, dejó de percibirse, tanto porque tal impuesto no tuvo más carácter que el de transitorio como efecto de las apremiantes circunstancias de la guerra que contra la usurpación extranjera sostenía la República, cuanto porque fue exclusivamente destinado á la reparación y mejoras del muelle y no á la municipalidad como un arbitrio: que como consecuencia de la cesación de este impuesto, se arbitró

por el Ayuntamiento el de doce y medio centavos por tonelada, á las maderas que se exportasen, debiéndolo pagar el comerciante-exportador: que este nuevo impuesto, origen del presente juicio, fue aprobado por el Gobierno del Estado, por considerarlo según informe del mismo Ayuntamiento, como equivalente á la contribución de 3 por ciento que debiera imponerse sobre sus frutos á los terrenos que producen maderas: que el mismo Supremo Gobierno dió su aquiescencia, á solicitud del Gobierno del Estado, al cobro de aquel impuesto, pues en 2 de Setiembre de 1873 ordenó á la Aduana marítima de aquel puerto, que no permitiera el embarque de maderas si los exportadores no acreditaban haber pagado el impuesto municipal referido.

Considerando que si el impuesto de diez centavos por tonelada, que como extraordinario se cobraba á los buques que durante la guerra de intervención arribaban á Minatitlan á cargar maderas, se ha considerado como legal, tanto por el Gobierno del Estado, como por el Supremo nacional, en la continuación de su cobro después del restablecimiento de la República, es evidente que cualquiera otra contribución ó derecho que se imponga bajo las mismas condiciones y circunstancias, debe tener el mismo carácter de ilegalidad que aquellas; que es indudable que la cuota de doce y medio centavos, objeto de este juicio, se encuentra en la misma condición y circunstancias que la de diez centavos; de que antes se hace referencia; puesto que se ha aplicado á las maderas que se exportan, se paga por el comerciante-exportador y está calculada sobre el número de toneladas que mida el buque que las conduzca; que la ilegalidad del impuesto de los diez centavos, viene á no dudarlo, de que era un derecho con que se gravaba un artículo de exportación, cuya facultad no tienen los Estados sin consentimiento del Congreso de la Unión; y en consecuencia, encontrándose en el mismo caso el de doce y medio centavos, debe también

comprenderse que tiene la misma ilegalidad. Considerando: que el mencionado impuesto de doce y medio centavos, no puede tenerse como equivalente á la contribucion de 3 por ciento que debiera imponerse sobre sus frutos á los terrenos productores de maderas, porque esta debería ser pagada por el arrendatario ó propietario del terreno productor, y no por el comerciante que recibe ó compra la madera para exportar; que si dicho impuesto fuese equivalente á la contribucion referida, es evidente que solo debería cobrarse á las maderas que se extrajesen de terrenos comprendidos dentro del municipio de Minatitlan, y no á las que se lleven para su embarque de otros municipios, puesto que el de Minatitlan no tendría facultad para hacer el cobro de dicho tres por ciento por los productos de terrenos correspondientes á municipalidades estranas, siendo así que actualmente se está cobrando el impuesto de doce y medio centavos por tonelada, á todas las maderas que se embarcan, aun cuando se hayan extraído en otras municipalidades, lo cual trae el consiguiente absurdo de estarse cobrando por el Ayuntamiento de Minatitlan, un arbitrio municipal al producto de terrenos no comprendidos en su jurisdiccion; que en consecuencia, la generalidad misma con que se ha dictado el impuesto, la forma y base que para su cobro se han determinado, está demostrando, que en realidad y á pesar del nombre de arbitrio ó impuesto municipal que se le ha dado, no es mas que un derecho con que se ha gravado la exportacion de las maderas, pues si como es muy posible un comerciante exportara maderas que no correspondan á terrenos del municipio de Minatitlan, tendría sin duda que pagar el impuesto de los doce y medio centavos, en razon á que este se aplica á todas las maderas que se embarquen; que estando terminantemente prohibido á los Estados por el artículo 112 de la Constitucion general en su fracción 1ª, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones

sin consentimiento del Congreso general, es evidente que el impuesto referido de doce y medio centavos por tonelada, que el Ayuntamiento de Minatitlan está cobrando á las maderas que se exportan, está en abierta oposicion con las prevenciones del artículo citado, y por consiguiente se violan con él las garantías de dicho artículo en las personas de los quejosos, á quienes se cobra el impuesto referido.

Considerando finalmente: que aunque uno de los quejosos, el Sr. Lectch, promovió anteriormente otro juicio de amparo, contra el cobro del mismo impuesto de que aquí se trata, solicitándolo ahora de nuevo, es sin duda porque se ha reiterado la exigencia de pago de dicho impuesto, y por tanto, aun cuando haya sido amparado en juicio anterior, debe comprenderse en la resolución que aquí se dicta: con cuanto mas ver y considerar convino, y de conformidad con los artículos 112, 101 y 102 de la Constitucion general de la República, y de las disposiciones de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

Primero: La Justicia de la Federacion ampara y protege á los Sres. Nicolas A. Lopez, Ricardo Lectch, José Casauranne, Guillermo R. Dick, Federico Tayuton, José María Maldonado, como socio gerente de la Sociedad Isaac Maldonado y Cª, y Constantino Maldonado, en representacion de la Sociedad Duplan y Maldonado, comerciantes de Minatitlan, contra el impuesto de doce y medio centavos por tonelada, que el Ayuntamiento de dicha Villa les cobra por las maderas que embarcan.

Segundo: Notifíquese, sáquense las copias prevenidas por la ley para el Semanario Judicial y para su publicacion en el Progreso y elévense los autos para su revision á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo mandó y firma el C. Juez de Distrito del Estado. Damos fé.—*Lic. Luis E. Gomez.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia que certifico: *H. Veracruz, 17*

de Julio de 1874.—*Lic. Luis I. Gomez.*—
Do asistencia.—*José María Gonzalez.*—
Vicente Simancas.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de
Justicia.*

México, Julio 23 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Manuel Oliver en representación de D. Nicolas Lopez, D. Jose Casaurane, D. Guillermo R. Dick, D. Ricardo U. Leeteh, D. Federico Taynton y de las casas representadas por D. José M. Maldonado gerente de la casa de comercio que gira bajo la razon social "Isaac Maldonado y C^{ta}" y D. Constantino Maldonado á nombre de la que gira bajo la razon Duplan y Maldonado del comercio de Minatitlan, contra el impuesto de doce y medio centavos que les cobra el Ayuntamiento de Minatitlan por cada una de las toneladas que miden los buques conductores de maderas, fundando su solicitud en que por el cobro de este impuesto se invade la esfera de la autoridad federal, violando la fraccion 1^a del artículo 112 de la Constitucion federal, que prohibe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre impuestos ó exportaciones; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito.

Considerando: que está demostrado en autos que el impuesto municipal, contra el cual se solicita el amparo, recae sobre frutos nacionales que van á exportarse, es decir sobre maderas que desde su corte estan destinadas á ser exportadas.

Que el procedimiento de la autoridad municipal que gradúa el impuesto por el número de toneladas que miden los buques exportadores, seria un indicio suficiente para demostrar que se trata de exportaciones que solo pueden ser gravadas por los Estados con permiso del Congreso de la Union.

Con fundamento de los artículos 101 y

TOMO VI.—PARTE II.

102 de la Constitucion federal, se declara que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que amparó á las personas arriba mencionadas.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 5 de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. Lic. Trinidad Gonzalez Doria en representación de José M. Guerra y Romualdo Salinas, contra la pena de muerte á que fueron condenados por el Alcalde 1^o de la Villa de Marin, Estado de Nuevo Leon, en la causa que les formó por el delito de homicidio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que mandada suspender por el Juzgado la ejecución de la sentencia que con fecha 15 del próximo pasado Febrero, pronunció el C. Alcalde 1^o de la Villa de Marin, contra José María Guerra y Romualdo Salinas condenándolos como saltadores, á la última pena, con arreglo á la ley de 2 de Mayo de 1873, ha continuado el recurso de amparo interpues-